

**RESUMEN Y PROSPECTIVA**

- **Quema de vehículos en Aguascalientes augura el inicio de un conflicto entre organizaciones criminales** (p. 3). Durante la madrugada del domingo 11 de febrero fueron incendiados más de una decena de vehículos en distintos puntos de la capital de Aguascalientes. Fueron detenidas varias personas, entre las cuales hay presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, o, en todo caso, sicarios contratados por esta organización. Esto en el contexto de la detención días antes de miembros de esta organización y de la publicación de un narcocorrido en el que se menciona la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación a Aguascalientes. Estos eventos podrían significar el inicio de una disputa cruenta entre estas dos organizaciones criminales en el estado, que hasta ahora se mantiene como uno de los más pacíficos y seguros del país, por lo que existe la posibilidad que esa seguridad y estabilidad comiencen a deteriorarse, se pondrán a prueba las estrategias de seguridad que se han implementado hasta el momento en el estado, para evitar que el conflicto derive en un repunte en la violencia.
- **Pese a los fracasos de la Iglesia para generar acuerdos con el crimen organizado, López Obrador expresa su aceptación a esta iniciativa dirigida a reducir el nivel de violencia en Guerrero** (p. 4). La semana pasada, el presidente de México dio a conocer la postura de su gobierno sobre los intentos de la Iglesia católica para generar acuerdos que reduzcan la violencia hacia la ciudadanía derivados de los enfrentamientos entre diferentes grupos del crimen organizado. AMLO respaldó la negociación y afirmó que los sacerdotes han contribuido en el esfuerzo de pacificar el país; afirmó que su gobierno respaldaba tales esfuerzos, siempre y cuando no conllevaran acuerdos de impunidad, y no se olvidaran de que el Estado es el principal responsable de garantizar la paz. Las cuatro diócesis de Guerrero han desempeñado un papel cada vez más relevante, sin la participación del gobierno estatal o federal, para acercarse a través de los obispos a los líderes de los grupos de Los Ardillos, Los Tlacos y La Nueva Familia Michoacana para intentar pactar una tregua especialmente en la situación del transporte que se vive en varias regiones. Aunque los intereses económicos, políticos y territoriales de crimen organizado no han permitido llegar a acuerdos, el papel que está desempeñando la Iglesia abre un debate que cuestiona la capacidad del gobierno para cumplir con su función esencial, y si requiere ayuda de otros sectores de la sociedad para lograr acuerdos de pacificación que se encuentran fuera de la ley con la delincuencia.

- **Crece el descontento de transportistas por inseguridad en carreteras; las protestas podrían aumentar este 2024** (p. 7). El pasado 15 de febrero, transportistas miembros de la AMOTAC efectuaron un paro nacional para protestar en contra de la inseguridad en carreteras. Si bien el paro concluyó tras aceptar el Gobierno federal algunas de las peticiones, existe un alto riesgo de que estas protestas se repitan durante 2024. Principalmente, por tres motivos concurrentes: el aumento gradual desde 2021 en el número de robos a transportistas; por el incremento de la violencia, cada vez con mayor frecuencia, en los robos—que tiene el potencial de llevar a la muerte de sus conductores—; y la presunción de que el simple despliegue de elementos de la Guardia Nacional poco contribuirá para recuperar la seguridad carretera.
- **Disputa política por el municipio de Ecatepec dentro de Morena tiene como trasfondo la actuación criminal del grupo denominado La Chokiza y de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)** (p. 10). Las pugnas por las designaciones a senadores, diputados federales y presidencias municipales en el estado de México comienzan a traslucir la presencia del crimen organizado vinculado a organizaciones sociales, y su alianza con algunos de los candidatos. El asesinato del precandidato de Morena a diputado federal por el distrito XVI es un claro ejemplo de estas disputas, que tienen en la designación del candidato a presidente municipal de Ecatepec el principal foco de conflicto. Resalta de la información en fuentes abiertas, la disputa política entre el actual presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, y el grupo morenista de Texcoco, presuntamente vinculado con La Chokiza. Aún está por definirse las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales, y los riesgos de violencia siguen siendo altos especialmente por el involucramiento del crimen organizado.
- **Aseguramiento de megalaboratorio en Sonora no genera certeza de que esta acción debilite al Cártel de Sinaloa (CDS), ni a la producción de drogas sintéticas en el país** (p. 13). Autoridades federales y estatales aseguraron un narcolaboratorio en Rancho Viejo, Quiriego. El gobernador Alfonso Durazo señaló que es el laboratorio con mayor capacidad de producción encontrado en la actual administración federal, con un valor de producción que alcanzaría los 700 millones de dólares en el mercado negro a través de más de mil millones de dosis de metanfetamina. La Semar considera que el sitio pertenece al Cártel de Sinaloa, ya que algunos de sus integrantes se han desplazado a Sonora. Destaca que no hubiera detenciones, ni se localizara armamento, a pesar de que autoridades dijeron que el lugar podría haber albergado a casi 50 personas. Hasta el momento, no se ha informado si el lugar estaba en uso, por lo que parecería más una demostración de los esfuerzos que se realizan para menguar el trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos, y no un ataque certero y contundente al CDS.
- **Se reportan 32 homicidios en febrero derivados de disputas del crimen organizado en Nuevo León** (p. 15). La dinámica criminal ha generado una nueva ola de violencia en

los municipios de la región capitalina de la entidad. Con un acumulado de 32 víctimas letales del crimen organizado en estas primeras semanas de febrero, advertimos que la región podría registrar la peor crisis de seguridad debido a un enfrentamiento entre fuerzas criminales del Cártel del Golfo aliadas del Cártel Jalisco Nueva Generación, por un lado, y el Cártel del Noreste, por otro. Adicionalmente, en semanas recientes hemos reportado una expansión criminal del Cártel de Sinaloa en la entidad mediante la célula criminal Los Rodos. Ante este panorama, hay señales para pensar que Nuevo León pueda convertirse en una de las entidades más violentas del territorio en el mediano plazo.

- **Los recursos presupuestales de SEDENA, SEMAR, y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantienen tendencia al alza en los últimos tres sexenios, mientras que durante los últimos seis años se observan disminuciones presupuestales para la FGR y de la Unidad de Prevención y Readaptación Social** (p. 17). Lantia Intelligence presenta un análisis del presupuesto federal asignado al sector de seguridad de los últimos 19 años (2006 a 2024), es decir, los recursos para las dependencias cuyas funciones se relacionan con la seguridad. Se identifica que la SEDENA a pesar de recibir el mayor aumento en 2024 (122.1%), dicho aumento se relaciona con la asignación de 125.9 mil millones para el proyecto del Tren Maya, el cual no se relaciona con el cumplimiento de funciones encaminadas a la seguridad del país. La SEDENA y SEMAR mantienen tendencias al alza en cuanto al monto de recursos que se les ha asignado en los últimos tres sexenios. Durante la administración de AMLO la SSPC ha recibido un aumento del 40.9%, y en específico la Guardia Nacional muestra un incremento del 19.8% en comparación con el presupuesto de la Policía Federal. De igual manera, durante el sexenio de AMLO la FGR y la Unidad de Prevención y Readaptación Social han mostrado disminuciones del 18.4% y 8.1%, respectivamente.

ANÁLISIS



Quema de vehículos en Aguascalientes augura el inicio de un conflicto entre organizaciones criminales

DINÁMICA CRIMINAL

Durante la madrugada del domingo 11 de febrero fueron incendiados más de una decena de vehículos en distintos puntos de la capital de Aguascalientes, además hubo un incendio más al día siguiente. La mayoría se concentraron en la zona oriente de la capital. En respuesta a estos eventos, la Fiscalía General del Estado informó de la detención de siete implicados en estos hechos, después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del C4 y C5, que podrían pertenecer al Cártel de Sinaloa o alguna de sus organizaciones subordinadas, como Cáteles Unidos o El 30. También se informó que, supuestamente, se les iba a pagar entre 500 y mil pesos a cada uno de los detenidos por vehículo incendiado. Cabe

mencionar que los detenidos viajaban en motocicletas y que los incendios fueron causados con bombas molotov. Estos últimos detalles son importantes porque dan cuenta de una estructura de sicarios y de personal disponible para las organizaciones criminales que no necesariamente pertenecen a ellas, pero que prestan sus servicios, y que, por lo tanto, no tienen acceso ni a la tecnología que usan a nivel nacional, ni a información privilegiada sobre sus estructuras y objetivos.

Estos hechos ocurrieron después de la detención, el jueves 08 de febrero, de tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, por lo que existe la posibilidad de que esta fuera una retaliación, sin embargo, también existe la hipótesis de que sea un mensaje de advertencia y marcaje de territorio dirigido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quien mantienen una disputa a nivel nacional, pues en esa misma semana salió a la luz un narcocorrido de Chicho Castro y Tony Aguirre (cantantes originarios de Sonora) en el que se hace referencia a la llegada del CJNG o "cártel de las cuatro letras" a Aguascalientes.

Si bien el CJNG ya tenía presencia en la capital y en otros municipios del estado como Calvillo y Cosío, su poder está mucho más acotado que el de su rival, por lo que estas amenazas podrían responder a un intento por expandirse territorialmente y fortalecerse en las disputas que mantienen no solo en los municipios mencionados, sino en los Altos de Jalisco y en el sur de Zacatecas, donde la violencia es mucho mayor.

Estos eventos podrían significar el inicio de una disputa cruenta entre estas dos organizaciones criminales en Aguascalientes, que hasta ahora se mantiene como uno de los estados más pacíficos y seguros del país, por lo que existe la posibilidad que esa seguridad y estabilidad comiencen a deteriorarse, sobre todo en la capital, que es precisamente el municipio más violento del estado, concentrando más de la mitad de las Víctimas Letales del Crimen Organizado (246 de 430). Se pondrán a prueba las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del estado, para evitar que el conflicto derive en un repunte en la violencia.



Pese a los fracasos de la Iglesia para generar acuerdos con el crimen organizado, López Obrador expresa su aceptación a esta iniciativa dirigida a reducir el nivel de violencia en Guerrero

RIESGO SOCIAL

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por Guerrero para supervisar los avances de reconstrucción derivados del impacto del huracán Otis. En la conferencia de prensa matutina del 15 de febrero realizada en Acapulco, y en respuesta a la pregunta de periodistas locales, López Obrador dio a conocer la postura del gobierno sobre los acercamientos realizados por los obispos de la Iglesia católica para buscar acuerdos con el crimen organizado que permitan reducir la violencia. Los periodistas solicitaron la opinión del ejecutivo Federal sobre las negociaciones que se llevaban a cabo entre la diócesis de Chilpancingo y los grupos criminales de Guerrero. AMLO respaldó la

negociación y afirmó que los sacerdotes de todas las iglesias (evitó poner énfasis en el papel protagonista de la Iglesia Católica) han contribuido en el esfuerzo de pacificar el país; reconoció particularmente el papel de la diócesis de Michoacán, y afirmó que su gobierno respaldaba tales esfuerzos, siempre y cuando no conllevaran acuerdos de “impunidad, privilegios o licencias para robar”. Además, enfatizó que, pese al involucramiento de la Iglesia, era responsabilidad del Estado garantizar la paz y la tranquilidad.

Durante las últimas semanas, las autoridades locales de la Iglesia católica en Guerrero intentaron acercarse a los diversos líderes de organizaciones criminales para entablar un diálogo que generara condiciones para reducir la violencia, los alcances de estos posibles diálogos por la paz nunca han estado definidos con precisión. Los esfuerzos para dialogar con los principales grupos criminales han sido liderados desde hace casi diez años por el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, cuando llegó a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa en 2015. No obstante, quien ha tomado en la actualidad las riendas del proceso es José de Jesús González Hernández, actual obispo de Chilpancingo.

- José de Jesús González Hernández nació el 25 de diciembre de 1964 en Etzatlán, Jalisco. Tras completar sus estudios religiosos en Israel, fue ordenado como sacerdote el 29 de junio de 1994. A lo largo de su trayectoria eclesiástica ha ocupado diversos roles pastorales en México y Mozambique, destacando por su trabajo en comunidades marginadas. Anteriormente ejerció como Obispo Prelado de Jesús María del Nayar. En 2022, el Papa Francisco lo nombró Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en reconocimiento a su compromiso con las causas de los pueblos indígenas y las comunidades afro-mexicanas.

En su declaración a los medios de comunicación, González Hernández afirmó que los obispos de Guerrero (Ciudad Altamirano, Chilpancingo, Tlapa y Acapulco) se sentaron por separado con los líderes del crimen organizado que operan en las regiones de Tierra Caliente y la Sierra con la idea de pactar una tregua que ayudase a disminuir la ola de violencia que asola a las comunidades del estado desde el año pasado, especialmente en Taxco, Acapulco, la sierra guerrerense y la zona centro. Sin embargo, los resultados no fueron fructíferos. Declaró que había demasiados intereses contrapuestos, “demasiadas cabecillas” involucradas, lo que había dificultado un diálogo constructivo. Aunque buscaron reunirse por separado con los líderes de diferentes grupos del crimen organizado, particularmente con Los Tlacos, Los Ardillos y La Nueva Familia Michoacana, los representantes de la Iglesia no consiguieron un consenso de paz a nivel estatal en este primer acercamiento, aunque sí consiguieron una pequeña victoria en la medida que mediante una llamada telefónica entre los líderes de los grupos de Los Tlacos y Los Ardillos se pactó un cese temporal de hostilidades en la ciudad de Chilpancingo.

Sin abundar en los detalles de la negociación, el obispo González declaró que uno de los líderes criminales propuso una división del territorio de Guerrero entre las organizaciones como fórmula para conciliar la paz, pero los dirigentes de los grupos rivales rehusaron esta

propuesta. Según el obispo, los líderes criminales sopesaron en un inicio la posibilidad de una división territorial del estado como solución al conflicto, pues eran conscientes de los costos humanos que la disputa ha causado a la sociedad guerrerense y a ellos mismos. Empero, los intereses políticos, económicos y de conquista territorial se impusieron, y ello impidió convertir la propuesta en una solución concreta para todo el territorio guerrerense. Lejos de desanimarse, el obispo declaró que la diócesis de Chilpancingo, respaldada por la Conferencia Episcopal Mexicana y por el papa Francisco, continuaría realizando esfuerzos por la paz en Guerrero y todo el país.

Es en ese entorno en el que se produjo la declaración del presidente López Obrador sobre los esfuerzos de la Iglesia católica en Guerrero, y por sus repercusiones sorprendió a la opinión pública nacional, así como a la clase política mexicana. En el caso de los políticos locales, el apoyo de López Obrador podría generar rispideces con las autoridades estatales de su propio partido. En los últimos años el obispado de Chilpancingo ha sido muy crítico del gobierno de Guerrero; lo fue durante el período priísta de Héctor Astudillo, y ahora también con la gobernadora Evelyn Salgado. De hecho, en abril de 2023, el dirigente estatal de MORENA, Jacinto González Varona, descalificó el esfuerzo de los obispos, pues insinuó que sólo buscaban la tregua entre Los Tlacos y La Nueva Familia Michoacana para que la Iglesia pudiese celebrar la Semana Santa en Taxco con tranquilidad.

Lo mismo ha ocurrido en Michoacán, donde las diócesis, especialmente la de Apatzingán, han sido muy críticas del gobierno de Ramírez Bedolla, y han comenzado a crear organizaciones con la ayuda de la sociedad civil (Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación) destinadas a ayudar a las víctimas y buscar la pacificación del estado. Por ello, una de las consecuencias inesperadas de la declaración presidencial podría ser la erosión de la autoridad estatal de Guerrero y Michoacán en términos de su participación en la negociación con actores locales. En la práctica, la declaración del ejecutivo Federal ofrece una fuente de legitimidad inesperada a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la corporación eclesiástica, para negociar con el crimen organizado sin incluir al gobierno estatal. Aunque es un diálogo que esta fuera de la ley, y reconocerlo erosiona la autoridad gubernamental en todos sus niveles.

La declaración del presidente López Obrador también dio lugar a diversas críticas. Por un lado, la permisibilidad y laxitud con la que se refirió a la participación de la Iglesia en temas de seguridad reabre una polémica histórica sobre la relación entre el Estado y la Iglesia, esta vez bajo el lente de la seguridad nacional y la violencia. Podría cuestionarse que, si el gobierno es incapaz de cumplir con su tarea básica de proveer paz y seguridad, la Iglesia podría adoptar una postura cada vez más activa, sustentada en la legitimidad nacional e internacional, así como en el deber moral de proteger a su feligresía. Además, en un entorno electoral donde la Iglesia conserva un papel importante (basta reconocer que ambas candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, visitaron esta semana el Vaticano para mostrar que se encuentran en buenos términos con el papa Francisco), la corporación católica podría asumir, si existe el ánimo político para una mayor cooperación

entre Estado e Iglesia en esta materia, un nuevo papel en la búsqueda de la estabilidad social en comunidades donde las fuerzas de seguridad del gobierno ya no tienen capacidades de proteger a la ciudadanía, ni a los aspirantes a puestos de elección popular. Por otro lado, la propuesta de permitir que la Iglesia negocie mecanismos de paz con el crimen organizado ha acarreado diversas críticas, especialmente de los partidos opositores del PRI y PAN. Se arguye que representa el reconocimiento tácito de que el gobierno, lejos de tener la capacidad para perseguir y procesar a los grupos criminales, está a favor de pactar con ellos, adoptar una actitud sumisa, y mostrarse omiso en la aplicación de la ley. Esta postura es compartida por legisladores como Rubén Moreira del PRI, quien expresó que “con el diablo no se platica ni se pacta”, o Teresa Castell del PAN, quien afirmó que la declaración del presidente López Obrador no era más que una confirmación de sus vínculos con el crimen organizado.

Dichas declaraciones deben ser entendidas en clave electoral. Empero, ello es una oportunidad para reflexionar sobre el tratamiento que desde el Estado se le ha dado al fenómeno del crimen organizado en los últimos 18 años; sobre si el esquema confrontativo de la “guerra contra las drogas” ejercido desde el protagonismo único del Estado debería seguir aplicándose con la misma rigurosidad pese a sus resultados exiguos; y sobre si ha llegado el momento de repensar la relación política con dichas organizaciones y partir de nuevos esquemas de justicia transicional. El crimen organizado es un factor real de poder en compleja interacción con actores múltiples de la sociedad y del sistema político mexicano. Quizás ésta es una coyuntura necesaria para que la clase política se replantee si otras corporaciones, como la Iglesia, pueden llenar los vacíos donde el Estado ha probado tener serias limitaciones en la búsqueda de la paz.



Crece el descontento de transportistas por inseguridad en carreteras, las protestas podrían aumentar durante 2024

RIESGO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

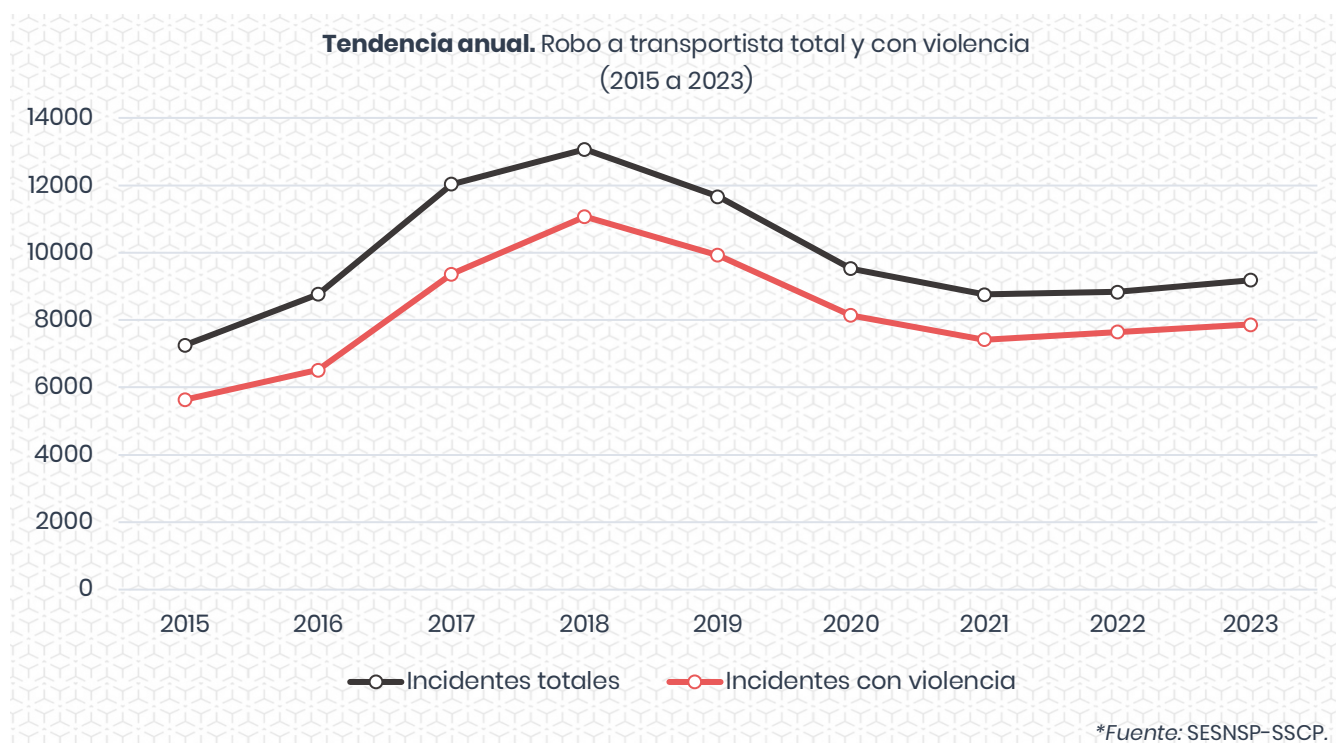
El jueves 15 de febrero, transportistas miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) llevaron a cabo un paro nacional que duró ocho horas para exigirle al Gobierno federal, entre otras peticiones, mejores condiciones de seguridad en las carreteras. En el contexto del paro nacional, los transportistas efectuaron bloqueos en vías de comunicación de todo el país, así como una movilización con dirección al Zócalo para presentar un pliego petitorio a las autoridades federales con sus demandas. El paro se levantó tras conversar con representantes del Gobierno federal —en el que éstos últimos aseguraron que atenderían sus exigencias—, pero la AMOTAC no descarta que se efectúe un segundo en el próximo mes si es que éstos no perciben resultados.

- Los puntos de las carreteras en las que se registraron afectaciones fueron: las autopistas [1] México – Puebla a la altura de Zaragoza; [2] México – Cuernavaca en Tepojaco; [3] México – Tulancingo; [4] México – Pachuca en la caseta San Cristóbal; [5] Puebla –

Veracruz; [6] México – Querétaro; así como las carreteras [7] Amecameca – Chalco; [8] Texcoco - Lechería del Circuito Exterior Mexiquense, y las vías [9] Morelos en Ecatepec y [10] Arco Norte en Tula.

El principal motivo del paro fue el aumento de los asaltos a transportistas —muchos de éstos, con violencia y en los que, inclusive, se ha registrado el asesinato de los choferes— pero también se incluyen otras exigencias históricas de este gremio.

- En este sentido, en el pliego petitorio de la AMOTAC se mencionan dos principales en materia de seguridad: [1] el aumento de acciones para mejorar la seguridad en carreteras y [2] las acciones para contener los abusos y la extorsión de parte de elementos de seguridad de los tres ámbitos de gobierno.
- Asimismo, en éste también se incluyen las siguientes peticiones: prohibición del vehículo doble articulado, emplacamiento de vehículos de transporte de modelos viejos, la instauración de tarifas oficiales para su operación, reclasificación de carreteras, homologación de la regulación de grúas, eliminación de permisos municipales y la devolución de carreteras que fueron convertidas en carreteras de cuota.



De acuerdo con datos del SESNSP-SSCP, la incidencia de robo a transportista fue un 30% menor en 2023 que el máximo registrado en 2018 (9 mil 181 y 13 mil 68 registros, respectivamente). Sin embargo, desde 2021—año en el que se registró el mínimo de la actual administración federal—, el número de denuncias por robo a transportista ha incrementado: de 8 mil 760 en 2021, a 8 mil 836 en 2022 y 9 mil 181 en 2023. De especial relevancia

es el porcentaje de robos a transportista que efectúan con violencia: en 2016, sólo el 74% de los robos era con violencia, pero en 2023, el porcentaje ascendió al 86 %.

Por otra parte, se identifica que, en 2023, los dos estados que concentran la mayor parte de los robos a transportista del país son Estado de México y Puebla con el 46% y 28% de los robos totales, respectivamente.

- En otros siete estados se identifica un alto número de incidentes de robo: Michoacán con 7%, San Luis Potosí con 4%, Jalisco con 3%, Oaxaca, Nuevo León y Morelos con 2% cada uno, y Veracruz con 1%. El resto de las entidades concentra tan sólo el 4% del total nacional.

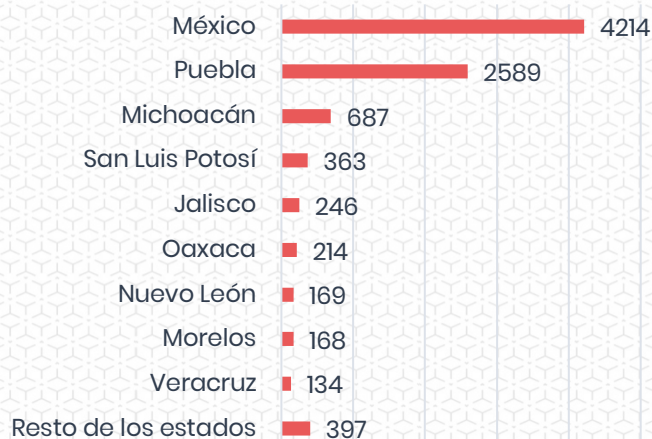
- De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), las carreteras de mayor peligro para los transportistas son:

- Estado de México: Boulevard Manuel Ávila Camacho – Lechería – Chamapa; Circuito Exterior Mexiquense (Entronque San Isidro – Cuautitlán Izcalli); Avenida Paseos del Bosque de Cuautitlán Izcalli; Autopista México – Querétaro (tramo Tepozotlán – Palmillas); y Autopista México – Pachuca.
- Hidalgo: Autopista México – Pachuca (entre Otumba y Tizuyuca); y Arco Norte (tramo México – Tuxpan).
- Puebla: San Martín Texmelucan – Esperanza; y Puebla – Orizaba.

La respuesta de autoridades fue ambivalente: si bien éstas anunciaron acciones para contener el riesgo de delitos en carreteras, éstas también acusaron a la AMOTAC de tener objetivos políticos en el contexto de las elecciones de 2024. En este sentido, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde acusó a los transportistas de abandonar las mesas de negociación, mientras que el presidente López Obrador acusó que éstos desean generar un conflicto en contra de su gobierno. Por su parte, la AMOTAC aseguró que ninguno de éstos ha participado en alguna de las mesas de negociación efectuadas (de acuerdo con la SEGOB se han realizado 120 reuniones).

- En el corto plazo, autoridades federales anunciaron el despliegue de un mayor número de elementos de la Guardia Nacional para vigilar carreteras. Sin embargo, es poco probable que éstos consigan recuperar la seguridad (en tanto grupos criminales conocen sus actividades y utilizan prácticas que impiden su detención).

Denuncias por robo a transportistas por estado en 2023



*Fuente: SESNSP-SSCP.

- Por otra parte, si bien el relevo de los elementos de la antigua Policía Federal por elementos de la Guardia Nacional mejoró la percepción de desempeño y confianza ciudadana, este cambio fue estrictamente subjetivo y no mostró resultado alguno en el largo plazo en términos de reducir extorsiones y abusos. Al no adoptar criterios que mantuvieran al margen a las guardias, el Gobierno federal permitió que las malas prácticas prevalecieran.



Disputa política por el municipio de Ecatepec dentro de Morena tiene como trasfondo la actuación criminal del grupo denominado La Chokiza y de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)

DINÁMICA CRIMINAL

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, y el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, sostuvieron una reunión de trabajo en la segunda semana de febrero, en la que acordaron coordinar acciones para el combate a los grupos delincuenciales y generadores de violencia, y reiterar su decisión de no pactar con las organizaciones delictivas.

Estas afirmaciones se presentan en el marco de una serie de hechos delictivos sucedidos en Ecatepec, que están relacionados con el grupo criminal identificado como La Chokiza, que dirige el ex agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, Alejandro Gilmore Mendoza Díaz (a) “El Choko”, y que en fuentes abiertas se señala que están vinculados con asesinatos, narcotráfico, cobro de piso, extorsión y préstamos “gota a gota”. Además, en videos recientes dados a conocer en redes sociales se le relaciona políticamente con la diputada local Azucena Cisneros Coss, quien actualmente busca su postulación como candidata de Morena a la presidencia municipal de Ecatepec.

- Videos difundidos en febrero de 2024 en redes sociales muestran a integrantes de La Chokiza, presumiendo propaganda de la diputada de Morena Azucena Cisneros y donde su líder menciona que les conviene apoyarla: “lo que vamos a manejar del tema político, nos conviene a todos, creo que se han dado cuenta que nos conviene”. Días antes la propia legisladora publicó un video con motivo del aniversario de La Chokiza junto con el líder Alejandro Gilmore. La diputada Cisneros ha ocupado el cargo de diputada local del distrito VIII de Ecatepec en las últimas tres legislaturas, y fue directora de Educación y Cultura en el municipio de Texcoco en el periodo 2013-2015 (gobernado por Delfina Gómez), así como responsable de comunicación social en la campaña de la gobernadora en 2023.

Al grupo delictivo de La Chokiza se le vincula con al menos 10 organizaciones ‘fachada’ que se hacen pasar como organizaciones sociales en el municipio de Ecatepec para encubrir actividades ilícitas y que continuamente buscan presionar a las autoridades para operar con impunidad. Entre ellas se encuentran la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON), e incluso el Sindicato 22 de Octubre. Todas ellas

encabezadas y/o aliadas con Alejandro Gilmore, quien en 2022 fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en posesión de un arma de fuego.

Dentro de estas organizaciones destaca la USON, que dirige Guillermo Fragoso Báez (a) “El Jefe” y/o “El Memo”, y en cuya trayectoria se encuentra el haber sido regidor de Ecatepec y dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM) donde enfrentó denuncias de los agremiados por malos usos de recursos y extorsión junto con Christian Jesús Castillo Grimaldo (a) “El Jimmy”, quienes posteriormente conformaron sus propias asociaciones la USON y el Sindicato 22 de Octubre, respectivamente.

- La USON es una organización que antes se conocía como Sindicato Libertad, cuyo líder era Hugo Bello Valenzo, quien se encuentra preso por secuestro. El brazo derecho de este personaje era Guillermo Fragoso Báez, quien después del encarcelamiento de líder, decidió formar la USON para operar en diferentes municipios del valle de México. La USON, a través de Fragoso Báez, ha expresado públicamente su respaldo a las aspiraciones políticas de la diputada Azucena Cisneros, en cuyos eventos se mezclan banderas del sindicato y de La Chokiza.
- En fuentes abiertas se responsabiliza a la USON de las agresiones, asaltos y extorsiones a los camiones de pasajeros que circulan de la CDMX al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIFA). La USON se encuentra detrás de las autodefensas de transporte constituidas en el estado de México para defender de la extorsión a los colectivos del transporte y piperos que se agrupan en Ecatepec, Chalco, Tecámac y Teotihuacan. Es una organización en crecimiento que se ha expandido incluso a otras entidades como Baja California, Campeche, Chiapas, Tabasco, Hidalgo y Veracruz.
- Existe un antecedente importante relacionado con hechos violentos ocurridos el 27 de abril de 2022 en la cementera Cruz Azul de Jasso en Tula, Hidalgo, donde fallecieron ocho personas, con 11 lesionados y 10 detenidos; estos últimos, integrantes del Sindicato 22 de Octubre y la USON, quienes fueron puestos en libertad.

El actual presidente de Ecatepec, Fernando Vilchis fue reelecto en 2021 para su segundo periodo por Morena, fue dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y representante de organizaciones de taxistas en el estado de México, además compitió en el proceso interno de Morena para la gubernatura en 2023. En su primer periodo de gobierno fue señalado por integrantes del cabildo de diferentes hechos de corrupción (compras de cámaras de vigilancia a sobreprecio, venta de lotes baldíos irregulares y cobro de cuotas a organizaciones de taxistas). Para el proceso electoral 2024, el presidente Vilchis buscó la nominación para el Senado, al no obtenerla porque Morena decidió apoyar la continuidad del actual Senador Higinio Martínez, aceptó la candidatura a diputado federal por el Distrito 10.

- Respecto a la candidatura por la presidencia municipal de Ecatepec, los morenistas Azucena Cisneros Coss (cercana al grupo de Texcoco y a la gobernadora Gómez),

Esmeralda Vallejo (esposa del actual presidente municipal Vilchis) y Ernesto Santillán (primer regidor del Ayuntamiento), se registraron como aspirantes para este cargo.

- El lunes 8 de enero de 2024 Luis Felipe N., fue detenido por policías municipales de Ecatepec, ya que tiene una orden de aprehensión por el homicidio de tres personas en 2023, en fuentes de información abierta se mencionó que formaba parte de la USON y La Chokiza, ya que al momento de su detención arribaron al Ministerio Público decenas de personas de esta organización para intentar liberarlo sin éxito. Posteriormente se difundieron videos en redes sociales donde presuntos integrantes de “La Chokiza” disparan contra varias fachadas de casas en Ecatepec para presionar a los pobladores a pagarles por cobros de préstamos gota a gota. El alcalde Fernando Vilchis Contreras, señaló que con esta detención se cumplía un objetivo prioritario de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Ecatepec.
- El 10 de febrero el aspirante a diputado federal de Morena por el Distrito 16 correspondiente a los municipios Ecatepec y Tlalnepantla, Yair Martín Romero Segura, (a) “El Chorongo”, y su hermano Juan, fueron asesinados con disparos y arma blanca en calles de Santa Clara Coatitla en Ecatepec. Yair Martín Romero formaba parte del grupo político de Ernesto Santillán Ramírez, aspirante a la alcaldía de Ecatepec, y quien ha ocupado la presidencia municipal interina cuando el presidente Vilchis ha solicitado licencia. De acuerdo con los primeros reportes, Yair Martín Romero ya había denunciado ante la Fiscalía que recibió amenazas e intentos de extorsión por parte de líderes USON. En los días posteriores, registramos una movilización de cientos de militantes, consejeros y líderes de Morena en Ecatepec, encabezada por Ernesto Santillán Ramírez, para exigir a las autoridades del Estado de México que se castigue a los grupos criminales responsables de estos asesinatos.
- El 28 de enero de 2024, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena aceptó a trámite una queja contra la diputada Azucena Cisneros por tener vínculos con grupos criminales. La queja fue presentada por el consejero morenista Ramsés Nicolai Reyez, y quedó a cargo de los órganos internos de Morena, determinar si los videos presentados como evidencias son suficientes para negarle la postulación como candidata a la presidencia municipal de Ecatepec.

La disputa por el municipio de Ecatepec entre las facciones de Morena, se encuentra inmersa en una disputa donde participan organizaciones criminales. Este municipio ha dejado de ser una de las reservas históricas de votos del PRI, para convertirse en un bastión de Morena que le redituó 320 mil votos para la elección de Delfina Gómez como gobernadora y 450 mil para la elección presidencial en 2018. La disputa no es menor entre los grupos políticos identificados por un lado con el actual presidente municipal, y por el otro con la diputada Azucena Cisneros presuntamente apoyada por La Chokiza, y con antecedentes de cercanía con el grupo Texcoco y con la propia gobernadora Delfina Gómez. Es

previsible que esta disputa pueda cobrar más víctimas en una zona plagada de organizaciones criminales, que disponen de una amplia base social.



Aseguramiento de megalaboratorio en Sonora no genera certeza de que esta acción debilite al Cártel de Sinaloa (CDS), ni a la producción de drogas sintéticas en el país

OPERATIVOS DE SEGURIDAD

El 8 de febrero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acompañados por autoridades del estado y del gobierno federal, aseguraron un narcolaboratorio enclavado en Rancho Viejo, en la sierra del municipio de Quiriego. Según sus informes, este lugar es el de mayor capacidad de producción de drogas sintéticas encontrado en la actual administración federal.

El gobernador Alfonso Durazo dijo que el laboratorio tenía un valor superior a los 700 millones de dólares en el mercado negro, con un equivalente de más de mil millones de dosis de droga que podrían ser vendidas en Estados Unidos, Australia, Canadá, España y otros países.

En el lugar se encontraron 72 reactores, 102 condensadores, 32 centrifugadoras, así como vehículos, motocicletas y remolques. También se incautaron 35 mil 250 kilogramos de producto terminado y 5 mil 705 kilogramos en sustancias químicas, que podrían producir más de 40 mil kilogramos de metanfetamina.

Aunque no se ha establecido con qué grupo se relaciona este laboratorio, el secretario de la Semar, Rafael Ojeda, dijo que podría pertenecer al Cártel de Sinaloa (CDS): “Pensamos que lo que hacen estas personas es que cuando se les está afectando en determinado lugar, se tienen que cambiar. Y se vinieron para acá. Teníamos la sospecha de que andaban por aquí”. Según Ojeda, las actividades de producción del CDS se están reubicando debido a incautaciones de estos lugares clandestinos en Sinaloa. Como ocurrió en febrero de 2023 en Culiacán, cuando se localizó lo que en aquel momento era “el laboratorio con mayor capacidad productiva” encontrado, al contar con 13 reactores, ese operativo estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que informó que en el lugar se manufacturaba fentanilo y metanfetaminas.

Si la teoría de que este narcolaboratorio pertenece a alguna de las facciones del CDS, ya sea a la de Los Chapitos o la de Ismael (a) “El Mayo” Zambada, ésta no es la primera vez que los operativos de seguridad localizan uno de estos lugares en Sonora, ya que en diciembre de 2023, en la localidad Los Valles, municipio de Álamos, se encontró una narcococina que fue calificada como la más grande del sexenio. Aunque no se hizo una comparación con el equipo encontrado, se mencionó que se decomisaron más de una decena de centrifugadoras, así como más de 25 toneladas y 77 mil litros de precursores químicos.

En agosto de ese año, también en Quiriego se localizaron tres laboratorios con 14 reactores, 36 tambos de líquidos químicos, dos toneladas de precursor en polvo, dos tractocamiones

y una camioneta. Este hallazgo fue conocido como el más grande realizado en la región en ese momento.

A pesar de que este operativo evidencia que los esfuerzos por contener al crimen organizado continúan, del último aseguramiento en Quiriego destacamos:

- La falta de detenciones y de decomiso de armamento. A pesar de que las autoridades indicaron que se realizaron labores de inteligencia y que el lugar podría haber albergado a 50 personas, no se pudo lograr ninguna aprehensión. Se cree que los presuntos criminales pudieron escapar al escuchar el ruido de los helicópteros sobrevolando el sitio, porque fue por ese medio que los elementos de seguridad arribaron. No se sabe si el lugar era vigilado con gente armada ni si había más vehículos (además de los decomisados) que utilizaron para escapar.
- La vecindad y cercanía del sitio con el municipio de Cajeme el municipio más violento en el estado. Quiriego es un municipio rural y su cabecera municipal tiene apenas poco más de mil habitantes, y se encuentra a sólo 80 kilómetros de Cd. Obregón comunicado por la carretera estatal SON 190, que en la mayor parte de su trazo se encuentra en muy mal estado. Al no ser el primer hallazgo en la zona y con la alta producción que se predice existía en el sitio, no se sabe si las autoridades sabían de su existencia desde tiempo atrás, ya sea porque circulaban caravanas (si es que usaban la vía terrestre) o sobrevolaban el área para llevar y sacar el producto.
- Las cifras de narcolaboratorios activos incautados son muy bajas. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el sitio ya estaba abandonado, como ha sucedido en otros aseguramientos. Según datos de medios de información, menos del 5% de los laboratorios clandestinos que fueron incautados entre enero y julio de 2023, estaban activos. Y las cifras durante los primeros cuatro años de este sexenio, indicaron que aproximadamente un 89% de los mil 658 laboratorios hallados resultaron inactivos.

Las presiones de Estados Unidos para que México detenga a los líderes del CDS continúan, sobre todo al acercarse el proceso electoral en el vecino país. La lucha contra el narcotráfico es una de las mayores apuestas de los candidatos estadounidenses, por lo que la captura de alguno de los capos mexicanos acusados de producir y traficar ilegalmente drogas sintéticas sería de gran relevancia para el gobierno norteamericano.

Sin embargo, los vacíos de información, la manera de presentar los hechos a la opinión pública con el gobernador Durazo ataviado con traje de protección, cuando no se sabe si el sitio estaba activo (el olor de los materiales utilizados para la producción de drogas sintéticas como la acetona o el amoníaco quedan en el ambiente por mucho tiempo), aunado a las estadísticas de que menos del 5% de los narcolaboratorios incautados estaban en uso, animan a interpretar el hecho más como una demostración de resultados en el trasiego de drogas sintéticos ante las autoridades estadounidenses, e incluso ante la población mexicana

de cara al proceso electoral del próximo 2 de junio, pero no un verdadero ataque que provoque un desbalance al CDS.

Tampoco se tienen datos exactos del tamaño de los narcolaboratorios que sí están en funcionamiento, que posiblemente sean de mayor tamaño ante el aumento de la demanda del producto. Aunque el gobierno federal continúe negando la producción de fentanilo en territorio mexicano, existe la posibilidad de que las narcococinas estén cambiando hacia ese giro (aunque solo en el laboratorio en Sinaloa se especificó haber encontrado material para la producción de fentanilo).

Con la poca información recabada en fuentes abiertas internacionales, los laboratorios de fentanilo pueden funcionar en lugares pequeños y cerrados (incluso casas) con una producción de hasta 40 mil pastillas diarias en cada uno de estos sitios. Un kilogramo de fentanilo en polvo cuesta aproximadamente 17 mil dólares, que es vendido preparado en forma de pastillas (M30) en hasta 400 mil dólares. Estos laboratorios son pequeños, de uso intensivo y de difícil localización, requieren menos inversión y producen mayores ganancias.

Si la facción de Los Chapitos del CDS se está dedicando a la producción y trasiego de pastillas de fentanilo, la incautación de laboratorios de metanfetamina podría no ser de gran importancia ni para sus actividades ni para su supervivencia, por lo que las drogas continuarán produciéndose en otros laboratorios, incluso en nuevas regiones del país, sin que se tengan pérdidas considerables para la organización criminal en el mediano plazo.



Reportan 32 homicidios en febrero por disputas criminales en Nuevo León

DINÁMICA CRIMINAL

Esta semana reportamos un acumulado de 32 personas víctimas letales del crimen organizado debido a violencia generada por grupo criminales en el estado de Nuevo León. Si bien las autoridades reportan una disminución de la incidencia delictiva, datos de Lantia Intelligence señalan un aumento progresivo desde 2018 del número de víctimas en los municipios aledaños de la zona metropolitana. Presentamos los siguientes sucesos relevantes de esta semana:

- El 29 de enero, habitantes de Santa Catarina reportaron la aparición de un mensaje amenazante del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Parque La Huasteca. Debemos advertir que medios locales informan que este tipo de narcomensajes han sido desplegados, en realidad, por el Cártel del Noreste (CDN), para generar confusión y “calentar” la plaza. El CDN emplea técnicas de desinformación para confundir las acciones de seguridad en la región.
- El 6 de febrero se reportó una balacera en el centro de Monterrey, dejando como resultado un muerto y tres heridos. Sujetos armados atacaron a un narcomenudista que caminaba en el cruce de las calles Colegio Civil y 5 de Mayo.
- El 8 de febrero, la FGR desmanteló un laboratorio de drogas en el municipio de Doctor González. Fueron incautados 66 bidones con material sintético, sustancias

químicas como metanfetamina líquida y clorhidrato de metanfetamina, así como sosa cáustica y otros materiales.

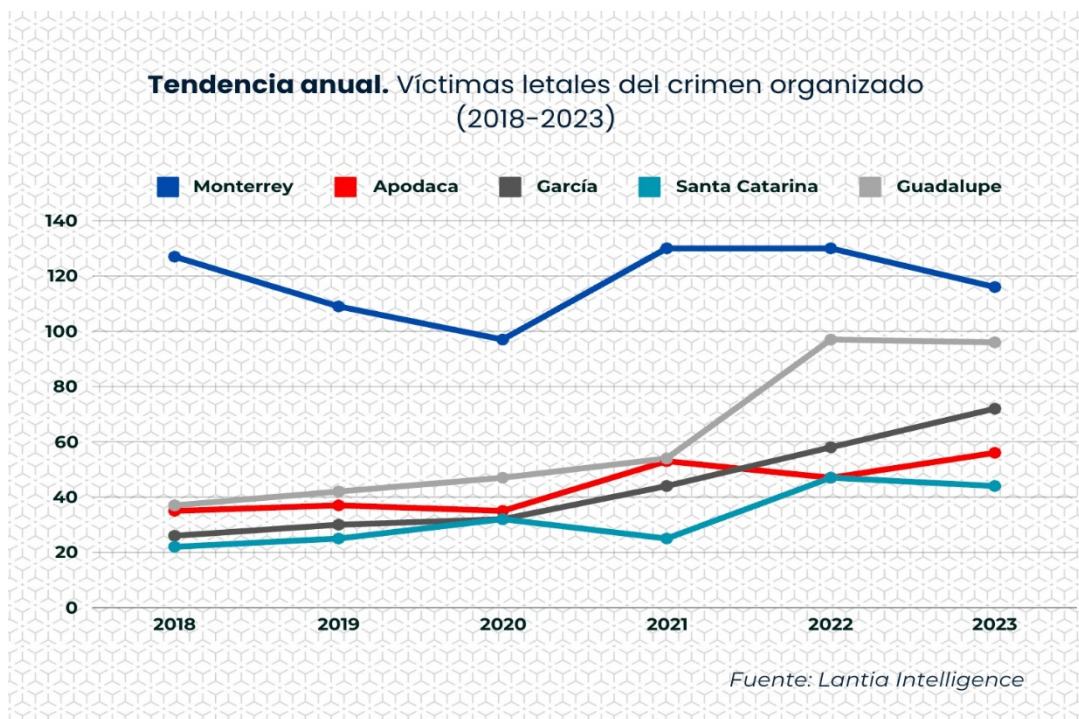
- El 13 de febrero, se reportaron diez homicidios y seis arrestos. Cinco víctimas letales se dieron en el municipio de García, supuestamente por remanentes del Cartel del Golfo.
- El 14 de febrero, miembros del Cártel del Golfo vandalizaron la presidencia municipal de Doctor Coss, dejando un mensaje en contra del Cártel del Noreste. En un enfrentamiento previo, se difundieron videos impactantes de una balacera entre el Cártel del Golfo y el CDN en la zona limítrofe entre Nuevo León y Tamaulipas.

Si bien la ciudad de Monterrey presenta una compleja red criminal de narcomenudeo y extorsión, la violencia de la entidad es generada por dos dinámicas criminales.

En primer lugar, el Cártel del Noreste, uno de los principales generadores de violencia en el país, continúa con su expansión territorial desde Tamaulipas. Esta agrupación mantiene estrategias de desinformación y ataques contra población civil para quitar el arraigo social que tienen otras agrupaciones criminales a nivel local. Su principal rival es el grupo Los Metros (remanente del Cártel del Golfo), agrupación que mantiene una alianza con el CJNG desde julio de 2023. Aunque la presencia del CJNG en Nuevo León es reciente, la Unidad de Inteligencia Financiera ha registrado operaciones financieras del cartel en el estado desde el año 2020. Existen indicios que señalan a "Los Mata Mugrosos", brazo armado de la facción Metros, como los responsables de la toma de la presidencia municipal de Doctor Coss. Cabe advertir que los líderes de Los Metros son dos sujetos conocidos como "Juanito" y el "R-58".

En segundo lugar, el Cártel de Sinaloa ha desplegado una expansión en la entidad mediante un grupo criminal hasta ahora independiente conocido como Los Rodos. Este último ha lanzado amenazas contra Los Metros y el Cártel del Noreste, así como señalamientos de vinculación de policías locales y agentes ministeriales con estas organizaciones criminales. El pasado 15 de febrero, esta agrupación dejó una narcomanta y una cabeza humana en una hielera en Juárez, Nuevo León; la narcomanta menciona al gobernador Samuel García y a las autoridades locales de Juárez y Guadalupe, acusándolos de brindar protección a los demás cárteles criminales.

En este contexto, hay señales para pensar en que Nuevo León pueda convertirse en una entidad con altos índices de violencia en el mediano plazo. Aunque la incidencia delictiva ha disminuido desde 2018, la tendencia de víctimas letales del crimen organizado ha crecido. Sorprende la acumulación de violencia letal en municipios aledaños de la zona metropolitana de Monterrey (Juárez, Guadalupe, Gral. Escobedo, Apodaca, García, Santa Catarina, y Cadereyta Jiménez), municipios que podrían detonar una grave crisis de violencia en este año.



Los recursos presupuestales de SEDENA, SEMAR y SSPC mantienen una tendencia al alza en los últimos tres sexenios, mientras que durante los últimos seis años se observan disminuciones presupuestales para la FGR y la Unidad de Prevención y Readaptación Social

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

Lantia Intelligence presenta un análisis del presupuesto federal asignado al sector de seguridad de los últimos 19 años (2006 a 2024), es decir, los recursos para las dependencias cuyas funciones se relacionan con la seguridad: Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los datos presentados consideran el efecto de la inflación, por lo que son comparables entre sí. Cabe señalar que de 2014 a 2019 la Secretaría de Seguridad Pública fue absorbida por la SEGOB, y en consecuencia sus funciones junto con el presupuesto se reflejan en esta última para dichos años; y a partir de 2020 retoma sus funciones como la SSPC. Por otra parte, la Policía Federal estuvo en funciones de 2006 a 2020, y toma su lugar la Guardia Nacional en 2021 (sin olvidar que en 2020 se le asignó recursos para preparar su creación y funcionamiento). Los principales hallazgos se describen a continuación (nota las cifras que se presentan a continuación hacen referencia a miles de millones de pesos):

- De 2023 a 2024 se asignó un 60% más al sector de seguridad, pues se incrementa de 292.9 mil millones de pesos a 467.4 mil millones de pesos.

- La SEDENA recibió el mayor aumento (122,1%) en 2024, ya que sube de 116.8 a 259.4, sin embargo, dicho aumento se relaciona con la asignación de 125.9 mil millones para el proyecto del Tren Maya, el cual no tiene relación con la seguridad del país. Por otra parte, la SEMAR recibió un aumento del 64.4% (de 43.7 sube a 71.9); la SEGOB tuvo un incremento del 32.3% (sube de 8.2 a 10.9); y la SSPC tuvo un ligero aumento del 1.4% en su presupuesto ya que pasa de 104.4 a 105.8 mil millones de pesos; mientras que la FGR es la única dependencia que tuvo una disminución, aunque ligera, pues de 19.8 baja a 19.3, lo que implica un decremento del 2.3%.
- Al comparar el promedio anual del presupuesto asignado al sector de seguridad se identifica que SEDENA ha mantenido una tendencia al alza en cuanto a los recursos que recibe, de 81.5 mil millones de pesos al año en promedio recibidos durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), sube a 104.4 en la de Enrique Peña Nieto (EPN), lo que implica un incremento del 28.0%, y nuevamente aumenta a 144.4 en la de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es decir, un incremento del 38.4%.
- SEMAR también presenta una tendencia al alza, cuyos promedios anuales han sido de 29.8, 39.3 y 47.3 mil millones de pesos en los últimos tres sexenios respectivamente, lo que implicó un aumento del 32.2% (de FCH a EPN) y del 20.2% (de EPN a AMLO).
- La SEGOB ha mostrado una disminución, pues en el sexenio de FCH recibió 21.2 mil millones de pesos en promedio al año, y baja a 19.7 mil millones de pesos durante la administración de AMLO (decremento del 6.9%). Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública, recibía en promedio al año 55.2 mil millones de pesos durante el periodo de FCH, para el de AMLO, la SSPC muestra un aumento a 77.8 mil millones de pesos al año en promedio (aumento del 40.9%). En tanto que la Policía Federal habría recibido un presupuesto de 25.6 mil millones de pesos al año durante el sexenio de FCH, sus recursos aumentan a 36.2 mil millones de pesos durante la administración de EPN (41.2% de incremento), y ahora la Guardia Nacional ha recibido 43.3 mil millones de pesos en promedio al año durante los últimos cuatro años de la administración de AMLO (lo que implicaría un crecimiento del 19.8%).
- Se identifica que la ex Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República es de las dependencias que no han recibido aumentos en su presupuesto de manera consistente. Durante el periodo de FCH se le asignó en promedio al año 21.7 mil millones de pesos, el cual aumentó a 24.7 mil millones de pesos en promedio al año durante la administración de EPN (13.4% de aumento), sin embargo, durante el sexenio de AMLO bajó a 20.1 mil millones de pesos al año en promedio (decremento del 18.4%).
- El mismo comportamiento se observa para el caso de los recursos asignados a la Unidad de Prevención y Readaptación Social. En la administración de FCH su presupuesto fue de 12.9 mil millones de pesos en promedio al año, en la de EPN fue de 27.4 (lo que implica un incremento del 111.8%), y baja a 25.2 en el sexenio de AMLO (disminución del 8.1%).

